

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE : GLORIA PATRICIA VÉLEZ ISAZA
DEMANDADO : ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PENSIONES
PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL : 05-001-31-05-016-2020-00102-01
RADICADO INTERNO : 185-22
DECISIÓN :ADICIONA, ORDENA, REVOCA PARCIALMENTE Y
CONFIRMA
ACTA NÚMERO : 214

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE la ineficacia de la afiliación de la demandante a PROTECCIÓN S.A., que conllevó el traslado de régimen; se declare válida, vigente y sin solución de continuidad, la afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media.

Se CONDENE a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a Colpensiones todos los aportes que se efectuaron al Régimen de Ahorro Individual, incluidos los rendimientos financieros y las cuotas de administración.

Se CONDENE a Colpensiones a recibir los conceptos antes mencionados. Y se condene a las demandadas al pago de las costas procesales.

Como supuestos fácticos con que sustenta sus pretensiones, narra que nació el 10 de octubre de 1963; estuvo afiliada al ISS, entidad en la que acredita 204 semanas; se trasladó a PROTECCIÓN S.A. en julio de 1995 en donde acredita 1250 semanas. Al momento del traslado, no le suministraron información sobre las características y diferencias entre los regímenes pensionales, no le hablaron del derecho al retractor, no le brindaron información clara, precisa y veraz de los alcances del traslado; la accionada PROTECCIÓN S.A. no cumplió con su deber de información y buen consejo; el 16 de septiembre de 2010, la demandada PROTECCIÓN S.A. citó a la demandante para la reasesoría pensional, la cual no estuvo acompañada de una proyección ni de información suficiente, concreta y oportuna; la proyección de la mesada pensional en la modalidad de retiro programado fue realizada el 31 de octubre de 2019; el 18 de diciembre de 2019 la demandante solicitó a PROTECCIÓN S.A. el traslado a Colpensiones, la cual fue negada en comunicación del 24 de diciembre de la misma anualidad por no cumplir los requisitos para un traslado; elevó solicitud a Colpensiones, la cual fue negada.

RESPUESTA A LA DEMANDA

Colpensiones en la contestación asegura que es cierta la fecha de nacimiento; la afiliación al ISS, entidad en la que acredita 204 semanas; el traslado realizado a PROTECCIÓN S.A.; la reclamación elevada a Colpensiones fue negada; y el agotamiento de la reclamación administrativa. Frente a las demás pretensiones dijo que no le constan. Y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda (expediente digital 04).

Por medio de auto del 21 de enero de 2022, se dio por no contestada la demanda de PROTECCIÓN S.A. (expediente digital 13).

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 6 de junio de 2022, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad PROTECCIÓN S.A., realizada el 4 de julio de 1995, y en consecuencia, declaró que para todos los efectos legales la afiliada nunca se trasladó al Régimen de Ahorro Individual y siempre permaneció en el Régimen de Prima Media.

Le ORDENÓ a PROTECCIÓN S.A., trasladar a la demandante al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones; le ordenó a PROTECCIÓN S.A. devolver al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, incluyendo las cotizaciones de forma completa, los bonos pensionales, cualquier suma adicional, frutos e intereses, sin que pueda retener los gastos administrativos ni los aportes de solidaridad ni ningún concepto, pues se considera que en ningún momento debió producir ningún efecto jurídico dicho traslado. Esta erogación deberá realizarla con cargo a sus propios recursos. Y para el cumplimiento de esta obligación concedió un término de 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia.

Le ORDENÓ a Colpensiones, a reactivar la afiliación de la accionante y recibir todos los dineros que sean trasladados por PROTECCIÓN S.A.; autorizó a Colpensiones a realizar un cálculo de equivalencia de los dineros recibidos desde el Régimen de Ahorro Individual, de forma tal que no le genere perjuicio alguno recibir al demandante al momento de cumplir con las obligaciones pensionales a su cargo. Se abstuvo de resolver las excepciones propuestas por Colpensiones, toda vez que no participó en el acto jurídico que se declara ineficaz y tampoco se condenó en costas. Y condenó en costas a PROTECCIÓN S.A.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de PROTECCIÓN S.A. apela la orden de trasladar las comisiones de administración y las primas de seguro previsional, por tratarse

de descuentos autorizados en el art. 20 de la Ley 100 de 1993; dicho descuento opera en ambos regímenes pensionales.

Adicionalmente señala que en el expediente obra prueba del certificado de rendimientos de la cuenta de ahorro individual, donde se demuestra que los aportes obtuvieron una ganancia, lo que da cuenta de la debida administración realizada por PROTECCIÓN S.A. y con la ordenen de trasladar los dineros de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros y lo descontado por las comisiones de administración, se estaría constituyendo en un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones por recibir una comisión que no es destinada a financiar la pensión de vejez y aunado a ello se le están trasladando los rendimientos de la cuenta de ahorro individual que se generaron por la buena administración realizada por PROTECCIÓN S.A., por lo que considera que su representada tiene derecho a conservar la comisión como restitución mutua. Hace referencia al contenido del Decreto 2555 de 2010 y señala que en concepto del 17 de enero de 2020, la Superintendencia Financiera de Colombia indicó que al declararse la nulidad o ineficacia de la afiliación se debe aplicar el art 7 del Decreto 3995 de 2008.

Finalmente, pone de presente que opera la prescripción de los descuentos destinado a la comisión de administración y financiar las primas de seguro previsional, al ser conceptos descontados en la periodicidad establecida en la ley y no financian en forma directa la pensión de vejez.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes no presentan alegatos.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar en virtud **del recurso de apelación:** i) Si hay lugar a revocar la orden dada a PROTECCIÓN S.A., de trasladar los gastos de administración y primas de seguros previsionales.

Y en el **grado jurisdiccional de consulta**, se deberá analizar: i) Si en el presente caso hay lugar a declarar la ineficacia del traslado; ii) Si hay lugar a

adicionar la sentencia y ordenarle a la sociedad PROTECCIÓN S.A. trasladar los rendimientos financieros a Colpensiones; iii) Si hay lugar a adicionar la sentencia, ordenándole a PROTECCIÓN S.A. trasladar a Colpensiones los gastos de administración, que se encuentran conformados por “... el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.”, debidamente indexados, por el tiempo que el afiliado realizó aporte en cada uno de los fondos de pensiones; iv) Si hay lugar a revocar la orden de trasladar el bono pensional.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que la demandante no es beneficiaria del régimen de transición por edad, porque a la vigencia de la Ley 100 de 1993, no tenía 35 años de edad al haber nacido el 10 de diciembre de 1963 (fl 25 del expediente digital 01); cotizó al ISS hoy Colpensiones, desde el 4 de octubre de 1990 al 1º de septiembre de 1994 (fls. 26 a 28); se trasladó a PROTECCIÓN S.A. el 1º de agosto de 1995 (fl. 40 del expediente digital 11).

Descendiendo al caso particular, se tiene que en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por la accionante, no se evidencia confesión alguna, al haber indicado que tiene 58 años; el traslado a PROTECCIÓN S.A. se dio porque ella se vinculó a una nueva empresa y ellos la afiliaron a PROTECCIÓN S.A. en 1995; en ese momento no recibió visita de los asesores de PROTECCIÓN S.A.; ella no tuvo motivación para afiliarse a PROTECCIÓN S.A. porque fue la empresa la que la afilió; no recuerda haber firmado formulario de afiliación a PROTECCIÓN S.A.; se enteró que estaba en PROTECCIÓN S.A. cuando estaba a punto de pensionarse, cuando iba a cumplir los 10 años anteriores para cumplir la edad pensional; la reasesoría pensional se dio porque ellos la llamaron y ella fue a una oficina, le informaron que estaba próxima a cumplir los 10 años para obtener la pensión, que se podía quedar o trasladarse, pero no le explicaron las garantías de estar en uno u otro régimen, le dijo que si ella perdía el trabajo era mejor quedarse en PROTECCIÓN S.A. y en su empresa iban a haber despidos y como ella estaba en la lista de esas personas, le dio susto y optó por quedarse; en la reasesoría no le hicieron proyecciones; la reasesoría duró 15 minutos; 4 años antes de pensionarse fueron a la empresa y ella preguntó cuál era el valor de la pensión y se dio cuenta que sería baja.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior **es libre y voluntaria** por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley”,* y si nos remitimos al art 271 de la Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa *“... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*, o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados-** en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...**” (Resalto fuera del texto)

“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994, ese de información que permita al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;...”

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aún operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877, 4811 de 2020, SL 1217 y 782 de 2021, y como juez constitucional en las sentencias STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una

información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada PROTECCIÓN S.A. (entidad que realizó el traslado de régimen pensional), no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, cuando tomó la decisión de trasladarse a dicho fondo de pensiones, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se violenta el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvo efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles (sentencia SL 3202 de 2021 que remite a las sentencias SL 1688 de 2019, SL 12715 de 2014, 28.479 de 2008, 39.347 de 2012 y 8397 de 1996) y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Al haberse dado por no contestada la demanda de PROTECCIÓN S.A. no logró aportar prueba (expediente digital 13); lo que lleva

a concluir que al momento de trasladarse de ISS al Régimen de Ahorro Individual, **no les dieron una información completa y suficiente.**

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración de la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad PROTECCIÓN S.A., realizada el 4 de julio de 1995 y la orden de trasladar a Colpensiones, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, incluyendo las cotizaciones de forma completa, frutos e intereses, sin que pueda retener los aportes de solidaridad.

2. De los efectos de la ineficacia

Esta Sala ha sido de la posición, que los conceptos que deben ser trasladados a Colpensiones en los eventos en que se declare la ineficacia del traslado corresponde a los siguientes¹:

1º. Capital ahorrado: Conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 y con fundamento en las sentencias SL 31.989 de 2008, SL 4964, SL 4989 de 2018, SL 1421, SL 1688, SL 1689 y SL 4360 de 2019.

2º. Rendimientos: En igual sentido este concepto se traslada de conformidad con el art. 113 ídem que señala *“Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos ...”*, y tiene como sustento jurisprudencial las sentencias enunciadas en el numeral anterior.

¹ Sentencia SL 3051 del 7 de julio de 2021, engloba la obligación de trasladar todos los conceptos, al señalar: “Por esto mismo, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJ SL2877-2020, CSJ SL4811-2020 y CSJSL373-2021). Criterio que igualmente aplica en relación con los montos destinados a seguros previsionales y el porcentaje destinado a conformar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tal como se precisó en recientes sentencias (CSJ SL2209-2021 y CSJ SL2207-2021).”

3º. Los gastos de administración, encuentra su sustento normativo en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 cuando señala: “... *el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.*”, traslado que tiene sustento en lo siguiente:

En lo que respecta a los gastos o cuotas de administración debidamente indexados, hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece la sentencia SL 1688 , 1689 de 2019 y SL 782 de 2021 y teniendo en cuenta: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos o pagos posteriores a la cotización realizada no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al Régimen de Ahorro Individual, 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron a la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliada la parte demandante en esta, en tanto que la cuota de administración es manejada directamente por el fondo de pensiones; 3º) Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver “*los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales*”; así mismo, la sentencia SL 3464 de 2019, que rememora las sentencias SL 31989 de 2008, SL 4964 y SL 4989 de 2018, SL 1421 y SL 1688 de 2019 ordena el traslado de este concepto; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

La orden que las cuotas de administración se trasladen debidamente indexadas se extrae de la sentencia SL 1688 de 2019, que dijo expresamente:

*“Está probado que la AFP accionada consignó al ISS, hoy Colpensiones, los aportes que la demandante tenía en su cuenta individual con sus rendimientos (f.º 98 a 101), sin embargo, no existe constancia de que hubiese devuelto también los valores correspondientes a **gastos de administración**, los cuales según se expuso en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, debe asumir con cargo a sus propios recursos.*

*En tal sentido, **se ordenará a la AFP accionada la devolución de esos dineros, debidamente indexados.**” (Resalto fuera del texto)*

Y la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, deberán devolverse **debidamente indexada**, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3571 de 2021 se expuso en lo que nos interesa: *“... se adiciona el ordinal segundo en el sentido de condenar a Colfondos SA a trasladar, también, ... y los valores utilizados en seguros previsionales, con destino a Colpensiones, debidamente indexados, por cuanto la restitución de las cosas a su estado anterior debe ser plena o completa (CSJ SL2877-2020)”*

Conceptos que no prescriben teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos, postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar. En igual sentido, se ha pronunciado las sentencias SL 373 de 2021 y SL 4062 de 2021.

4º. Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima: el traslado de estos aportes se encuentra igualmente consagrado en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 porque al tratarse de un aporte propio del Régimen de Ahorro Individual, no encuentra un equivalente en el Régimen de Prima Media, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR

1833 de 2016; traslado que tiene como sustento jurisprudencial la sentencia SL 2877 de 2020.

Y no sobra manifestar, que esta Corporación considera que el **principio de sostenibilidad financiera** no se violenta con la declaración de la ineficacia del traslado, porque si los efectos del traslado es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban y entre ellos, se integra la devolución en forma plena y retroactiva, con esta decisión se está protegiendo la sostenibilidad de Régimen de Prima Medía. Aunado a ello, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2877 de 2020 se pronunció al respecto, señalando:

“Asimismo, la decisión que se controvierte en casación tampoco lesiona el principio de sostenibilidad fiscal del sistema general de pensiones, puesto que los recursos que deben reintegrar los fondos privados accionados a Colpensiones serán utilizados para el reconocimiento del derecho pensional, con base en las reglas del régimen de prima media con prestación definida, lo que descarta la posibilidad de que se generen erogaciones no previstas.”

Teniendo claro lo anterior, considera la Sala que se deberá ADICIONAR la sentencia en el siguiente tenor:

- ORDENAR a la sociedad PROTECCIÓN S.A., trasladar a Colpensiones los rendimientos financieros.
- ORDENAR a PROTECCIÓN S.A., trasladar a Colpensiones los gastos de administración constituidos como anteriormente se explicó por “gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes” debidamente indexados.

3. De la devolución del bono pensional

En lo que respecta a la orden dada a PROTECCIÓN S.A. de devolver el bono pensional, se debe tener en cuenta que, previo al pago del bono pensional, existen unas etapas que se deben de generar, tal y como son: la emisión, expedición y finalmente la redención, siendo necesario precisar en este caso que, si bien es cierto que la redención normal del mismo sería a los 60 años, ellos es, para el **10 de diciembre de 2023** al haber nacido el 10 de diciembre de 1963, no existe prueba en el plenario de la emisión y redención del bono

pensional. Y aunado a lo anterior, en el hipotético caso que se hubiere realizado la redención anticipadamente (de lo cual no hay prueba), debe anularse y devolverse a la oficina de bonos pensionales, para realizar el trámite al que haya lugar.

Con fundamento en lo anterior, la orden en mención se REVOCARÁ, para en su lugar indicar que en caso de que el bono pensional haya sido recibido anticipadamente, se proceda a restituirlo a la oficina de bonos pensionales del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para que esta entidad proceda con su anulación.

Así mismo de conformidad con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia entre otras en sentencia SL 896 del 23 de marzo de 2022, se ADICIONARÁ la sentencia de primera instancia en el entendido de que, al momento de cumplirse la orden del traslado de la totalidad de los dineros que a título de aportes fueron pagados por la demandante y sus empleadores, junto con los rendimientos financieros que se hubiesen producido, y demás integrantes de su cuenta de ahorro individual, con las cuotas de administración, comisiones, aportes al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, primas para seguros previsionales o cualquier otra causa, debidamente indexados, **los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.**

Costas en esta instancia en la suma de \$1.000.000 a cargo de PROTECCIÓN S.A. por no prosperar el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia, **ORDENÁNDOLE** a la sociedad PROTECCIÓN S.A., trasladar a Colpensiones los rendimientos financieros.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia, **ORDENÁNDOLE** a la sociedad PROTECCIÓN S.A., trasladar a Colpensiones los gastos de administración constituidos como anteriormente se explicó por "*gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes*" debidamente indexados, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia, en lo que respecta a la orden dada a PROTECCIÓN S.A. de trasladar el bono pensional, para en su lugar indicar, que en caso de que el bono pensional haya sido recibido anticipadamente, se proceda a restituirlo a la oficina de bonos pensionales del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para que esta entidad proceda con su anulación.

CUARTO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia, en el entendido de que, al momento de cumplirse la orden del traslado de la totalidad de los dineros que a título de aportes fueron pagados por la demandante y sus empleadores, junto con los rendimientos financieros que se hubiesen producido, y demás integrantes de su cuenta de ahorro individual, con las cuotas de administración, comisiones, aportes al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, primas para seguros previsionales o cualquier otra causa, debidamente indexados, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

QUINTO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Costas en esta instancia en la suma de \$1.000.000 a cargo de PROTECCIÓN S.A. por no prosperar el recurso de apelación.

SÉPTIMO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: GLORIA PATRICIA VÉLEZ ISAZA
DEMANDADO :	: ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PENSIONES PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-016-2020-00102-01
RADICADO INTERNO	: 185-22
DECISIÓN	:ADICIONA, ORDENA, REVOCA PARCIALMENTE Y CONFIRMA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 23 de agosto de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 23 de agosto de 2022 a la 5:00pm



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO